

ESPAÑA, 2015: EL AÑO DE LOS TRES TEST

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado*

Antes de entrar en el tema, unas líneas acerca del título, que incorpora ese juego aliterativo: “tres tests”. No quiero recordar con él, desde luego, aquella vieja película de Saura (*Stress es tres, tres*, aburridísima, por cierto), ni tampoco alguna de las combinaciones consonánticas que tan brillantemente cultivara Cabrera Infante (*Tres tristes tigres*); tan sólo pretendo señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar hacia delante. Si en 2014 tal vez el hecho más sobresaliente desde una perspectiva general, y pensando en términos “históricos”, fue la abdicación de Juan Carlos I, que invitaba a hacer balances de todo el reinado, las pruebas que coinciden en 2015 están cargadas de futuro, por decirlo con expresión poética. Son los tres tests del título.

Primero, el test que para la democracia contiene la cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y generales antes de terminar el año), un calendario intenso (vale decir también disparatado) que trae consigo vientos de cambio en los gobiernos locales, autonómicos y de la nación, además de en el propio sistema de partidos. Segundo, el test de la recuperación económica, el de su solidez, calibrando si abre paso a una fase cíclica de expansión, propiamente dicha. Y tercero, el test que para la integridad territorial de España supone la anunciada convocatoria de elecciones con carácter plebiscitario en Cataluña, con la explícita determinación de la Generalitat de proceder en su caso a una declaración unilateral de independencia, una auténtica prueba de resistencia de materiales que dirían los ingenieros de caminos. No va a ser 2015, con seguridad, un año cualquiera para España.

* Sesión del día 19 de mayo de 2015.

Sobre cada uno de esos desafíos, por un utilizar un término equivalente, me propongo ahora ofrecer algunas reflexiones personales, aunque maduradas bastantes de ellas en debates mantenidos en el Círculo Cívico de Opinión. Para mayor concisión y brevedad, agruparé mis consideraciones en cada caso en unos pocos puntos, para dejar más espacio al posible coloquio posterior.

* * *

Empecemos por lo que es en cierto sentido el tema envolvente: la inminente apertura de un nuevo ciclo político. A tenor de los sondeos de opinión, la larga etapa de hegemonía dual característica de nuestro escenario político desde las elecciones del otoño de 1982, cuando el PSOE obtuvo la primera mayoría absoluta, parece llegar a su término, dada la probable pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia de dos nuevas formaciones políticas de rango nacional con alta probabilidad de captar porcentajes de voto relevantes. Cuatro en vez de dos; tetrapartidismo o, cuando menos, bipartidismo muy corregido, pues para formar gobierno cualquiera de los partidos hasta ahora claramente dominantes (PSOE y PP) tendrán que apoyarse al menos en uno de los nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos). Ya no será suficiente el concurso de partidos nacionalistas de implantación territorial limitada, lo que podría entenderse como un modelo de “bipartidismo imperfecto”; en el nuevo escenario las combinaciones habrán de producirse entre partidos con presencia orgánica en toda España: lo dicho, bipartidismo muy corregido o pluripartidismo, a secas. Durante algo más de tres decenios, PP y PSOE se han repartido entre el 75% y el 85% de los votos emitidos en elecciones generales; hoy, los sondeos recortan sustancialmente esos porcentajes, situándolos en torno del 50%. Final de etapa.

¿Qué cabe esperar? ¿Cuáles serán las consecuencias previsibles? Cinco anotaciones me parecen obligadas.

Primera: no estamos ante un territorio ignoto, con todo el misterio o toda la incertidumbre que ello implicaría. En los países de la Unión Europea el pluripartidismo efectivo —quiere decir, con más de dos partidos con opciones reales de participar en el gobierno de la nación o de determinar la composición de este—, es el sistema predominante, siendo el sistema bipartidista puro el menos usual. Y en toda Europa proliferan nuevos partidos: “insurgentes” los ha calificado el *Times* londinense. Por ese lado, pues, lo que acontece en España no dejará tampoco ahora de ser una variante más de un fenómeno de alcance europeo (desde Francia a Finlandia, y desde Alemania a Suecia). Además, el escenario que los sondeos anticipan tiene más de un punto en común con el que presidió la Transición —cuatro partidos con apreciable peso: UCD, PSOE, PC y AP— y en absoluto resulta excepcional con el que ha sido pauta

habitual en gobiernos autonómicos y locales o municipales. Nada, en consecuencia, por descubrir ni radicalmente desconocido; por ahí no se debería suscitar ningún temor... salvo, claro está, el que acompaña a la pérdida de cómodas posiciones durante extenso tiempo disfrutadas.

Segunda: el pluripartidismo no tiene por qué traducirse necesaria —fatalmente— en desestabilización, ni mucho menos en situaciones crónicas de ingobernabilidad o de crisis institucional, como en el fragor de las campañas electorales se vaticina. Es cierto que la hegemonía dual antedicha, el bipartidismo con alternancia, apoyado en mayorías absolutas o cercanas a serlo, ha contribuido a dotar de una alta estabilidad a los gobiernos de nuestra democracia, con muy saludables efectos en muchos órdenes, y desde luego no los menores en el económico, pues la estabilidad es nutriente de la confianza, que también para la economía, en tanto que hecho social, constituye un factor decisivo para alentar tratos y contratos, iniciativas y esfuerzos. Pero la estabilidad no la procuran únicamente mayorías absolutas o gobiernos monocolors de partidos con muy amplia mayoría de escaños. La estabilidad puede basarse también en acuerdos firmes entre diversos grupos parlamentarios o en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria. Conviene alertar contra la idea de que un régimen de mayorías absolutas resulta insustituible para dotar de estabilidad al sistema, y para combatir la incertidumbre. Las pulsiones más desestabilizadoras provienen siempre del mal funcionamiento de las instituciones, ya sea por impericia, ya sea por corrupción, o por las dos causas a la vez: ineficacia o corrupción es lo que horada la estabilidad, lo que mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¡Miremos dentro de nuestro propio recinto! La estabilidad política garantizada por el juego competitivo entre los dos partidos hegemónicos ha ido con el tiempo propiciando el uso partidario de las instituciones y todo un conjunto de prácticas de gestión que los ha distanciado de buena parte de sus votantes habituales y, peor aún, ha provocado grados elevados de desafección política, de malestar ciudadano y, también, de repudio de lo establecido.

Tercera: precisamente, desde la perspectiva de la salud de nuestra democracia y de su capacidad aglutinadora, lo que está aconteciendo incorpora no pocos ingredientes muy positivos.

Uno: está aumentando el interés por el espacio de la política; sectores de opinión que se sentían fuera de él, por indiferencia o por desapego, vuelven a prestarle atención, involucrándose activamente en algunos casos. Con toda probabilidad, esto se va a reflejar en el incremento de la participación en las votaciones (cuatro puntos se ganó en las autonómicas andaluzas). Mayor participación, más vitalidad de la democracia.

Dos: está promoviendo movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en todos los partidos ya establecidos desde tiempo atrás. Entre estos,

los habrá más sensibles que otros al cambio, a la renovación —también generacional—, pero todos acusarán el golpe, lo disimulen o no. “O cambiamos o nos cambian”, acaba de declarar quien encabeza las lista del PP en la región de Murcia. No se puede decir más claro.

Tres: está relegitimando de algún modo el sistema de la democracia representativa, al incorporar a su juego político competitivo porciones significativas de la ciudadanía propensas a situarse en sus márgenes o fuera de él, al considerarlo ajeno (reténganse estos datos: según el barómetro del CIS del mes de abril, el 16% del apoyo a Ciudadanos proviene de quienes en 2011 votaron nulo, y ese porcentaje sube al 26% en los que expresan preferencia por Podemos).

La importancia de este hecho no se debe rebajar. El caso de Podemos es paradigmático: lo que empezó siendo una aglomeración informe de plataformas de crítica primaria y de rechazo apenas sin matices del sistema —acaba de cumplirse el 4º aniversario de las acampadas del 15M—, se ha convertido en una opción política con voluntad de integrarse en el sistema para regenerarlo desde dentro. Un buen paso para la relegitimación del marco institucional.

¿Sólo contención oportunista del buen revolucionario, siguiendo el mandato leninista? ¿Sólo “maquillaje táctico”? No lo creo, pero aún así bienvenido sea: ya no se anima a rodear el Congreso de los Diputados con ánimo de bloquear su actividad, sino que se aspira a entrar en él a través de los votos obtenidos en puja electoral ordinaria. No puede sorprender que la calle se haya pacificado en los últimos meses, como ha reconocido la Delegación de Gobierno de Madrid. En vez de manifestaciones, votaciones. Y, una vez realizadas éstas, en vez de frentes de rechazo, los tanteos que exige la formación de gobiernos representativos. (Por cierto, y dicho entre paréntesis: alguna analogía hay, con todas las salvedades, entre todo ello y la formación de Alianza Popular de la mano de Manuel Fraga en los primeros compases de la Transición, ganando para la democracia a gentes que descreían de ella).

Cuarta: no debe repartirse la piel del oso antes de cazarlo, que en nuestro tema equivale a decir que ha de procederse con mucha cautela a la hora de analizar el declive de los grandes partidos. Hasta ahora, se manejan sólo intenciones de voto medidas a través de encuestas, y el clima de opinión está revelándose más cambiante que en ninguna otra ocasión anterior, con volatilidad muy alta; y es sabido que los ejercicios demoscópicos se hacen —como las previsiones demográficas— para ser desmentidos por la realidad. Habrá que esperar. El bipartidismo está tocado pero no hundido; los grandes partidos, más o menos con alargada historia a sus espaldas, tienen capilarizado el territorio nacional, lo que les proporciona un suelo firme del que no disponen las formaciones nuevas. La receptividad a las propuestas de estas últimas está siendo mayor, además, en las grandes urbes que en las pequeñas y en los municipios más ruralizados: una España “a dos velocidades”, también en esto.

Y no se olvide que son las ciudades menores y las circunscripciones con menos población las que resultan beneficiadas en el reparto de escaños en nuestro sistema proporcional.

Más aún: los partidos que llamamos emergentes sufrirán crecientemente el desgaste de su “exposición” pública y de las servidumbres que conlleva toda organización partidaria. Mientras se han limitado a acoger estados de opinión, a catalizar el malestar ciudadano —el provocado por los efectos de las crisis, las políticas de ajuste y tantos casos de corrupción, todo mezclado—, su atractivo no ha dejado de crecer, apoyado en mensajes tan elementales como eficaces de contestación al sistema y en la utilización de novedosas herramientas de comunicación —no todo es telegenia— a los que estaban poco habituados los partidos más veteranos. Pero ese atractivo posiblemente se reducirá —en algún caso ya es palpable— al ir asumiendo el día a día de la vida política y de la vida de partido: pugnas internas por el control de la organización, controversias en la definición de programas, disciplinas, jerarquías y disciplinamiento, exhibición pública de currículos y comportamientos... De nuevo aquí el recorrido de Podemos está resultando paradigmático, un ejemplo de manual. Sin perder de vista, cabe añadir, la creciente rivalidad que se desatará entre los nuevos partidos al buscar votos en los mismos territorios. La función solo ha hecho que empezar. ¿Será todo únicamente producto —como sugieren algunos líderes talludos— de la inestabilidad social en que se ha doblado la crisis económica, un producto que desaparecerá del mercado (político) cuando conozcamos otra etapa de expansión económica? Lo dudo; pienso que los nuevos han llegado y están aquí para quedarse un buen rato.

Y **quinta**: en el corto plazo, en todo caso, se abre un tiempo político en el que la cultura de pactos y de cooperación política va a ser asignatura obligatoria, no optativa. Una asignatura que incluso debería considerarse “troncal” —por decirlo con la jerga de los actuales planes de estudio universitarios—, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. El acuerdo como bien democrático. La negociación como base de la democracia para rehuir de los excesos del principio de la mayoría (“ese abuso de la estadística”, que escribiera Borges). La cultura del compromiso, de la transacción en ese “antagonismo estructurado” que es la democracia. La disposición y la capacidad para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, entonces la prueba que estamos pasando habría de contemplarla no como amenaza sino como oportunidad: la oportunidad de construir una democracia más vigorosa, con mayor pulso, de mejor calidad. Y también más fecunda, más creativa, como lo fue la española —y no poco paradójicamente al ser una recién nacida— cuando estaba instaurándose el régimen de libertades en la Transición.

* * *

Me referiré a continuación a otra de las pruebas que ha de pasar España en 2015: ¿qué consistencia presenta la recuperación económica? Distinguiré ahora también unas pocas notas.

Primera los datos más recientes son terminantes: la recuperación es un hecho. El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2015, nueve décimas respecto al trimestre anterior, algo más del doble que la media de la Eurozona y de toda la Unión Europea (0,4%), coloca la tasa interanual (esto es, sobre el mismo trimestre del año anterior) en el 2,6%, un nivel más que notable en las actuales circunstancias. Nada que ver con el desmayado repunte que se conoció en 2010, breve interludio entre las dos recesiones padecidas entre 2008 y 2013. Después de la abrupta caída del 2009, el voluntarismo político intentó una remontada inmediata, revelándose pronto su fiasco, un intento fallido; en cambio, el retroceso conocido durante 2011 y 2012 ha encontrado una rampa de salida menos empinada en su comienzo pero más firme y prolongada hasta llegar a hoy. Ya son siete los sucesivos registros trimestrales del PIB de la economía española con cifras positivas (en medidas intertrimestrales), y están acompañados de múltiples indicadores en la misma dirección: los que captan el sentimiento de consumidores y empresarios, y los que siguen la actividad real en unos u otros sectores productivos; los del mercado laboral y los del sistema crediticio; los que toman el pulso tanto de la demanda interna como de las transacciones internacionales; hasta el muy deprimido sector inmobiliario ofrece signos evidentes de reanimación. Un verdadero “vuelco” de la larga situación recesiva precedente. Al Gobierno, naturalmente, le ha faltado tiempo para airearlo, dado el estado comatoso de la economía española (déficit público, déficit exterior, desempleo, desinversión, desfallecimiento empresarial) al comenzar la legislatura.

Segunda: apoyado en la tendencia que pueden dibujar esos mismos datos, el Gobierno ha aprovechado también para apostar por un horizonte de altos y mantenidos crecimientos del PIB y del empleo, con reducción sustancial del déficit público y mantenimiento de los buenos registros en el sector exterior; es el escenario que contempla el actualizado *Programa de Estabilidad, 2015-2018*, dado a conocer en los últimos días del pasado mes de abril y remitido a la Comisión Europea. Según ese documento oficial, estaríamos ante un nuevo ciclo propiamente expansivo, con cuatro años por delante de aumentos acumulativos del PIB en torno al 3%, la creación de cerca de 2 millones de puestos de trabajo en el cuatrienio, la caída del déficit público hasta niveles irrelevantes (-0,3 % en 2018) y un sostenido crecimiento de las exportaciones, del orden del 6% interanual. De hacerse realidad, permitiría recuperar en 2016 el PIB perdido en las dos sucesivas recesiones antes aludidas (hasta 7,5 puntos porcentuales) y rebajar en el cuatrienio casi diez puntos la tasa de desempleo (dejándola en 15,6% en 2018): sería un buen balance, por supuesto. Aunque —digámoslo de inmediato y de modo coloquial— no para tirar cohetes: incluso cumpliéndose a rajatabla ese incitante plan, a España la habría costado cinco años más que a Alemania o a Francia la recuperación del valor

de la producción de bienes y servicios (ocho años en vez de dos o tres); al terminar esta década el desempleo estaría todavía muy lejos de bajar de los dos dígitos (15,6% en 2018, que equivale a 3,3 millones de parados), y la Deuda pública todavía supondría bastante más del 90% del PIB en 2018 (93,2%). Guárdense los fuegos artificiales para mejor ocasión.

Tercera: pero una cosa es evitar el triunfalismo (casi tan malo como el derrotismo de cualquier especie) y otra no reconocer los motivos para la autoestima, esa facultad del espíritu de la que los españoles nunca andamos sobrados. Es verdad que desde fuera varios factores han concurrido en los últimos meses para empujar con fuerza la actividad interior: uno, la política monetaria excepcionalmente laxa del BCE, iniciada en el verano de 2012 y con un salto cualitativo a partir del pasado mes de marzo, que no solo mantiene el precio del dinero en su mínimo histórico (0,05%), sino que también ha puesto en marcha un programa de compras masivas de bonos públicos y en menor medida privados, facilitando así condiciones de financiación y la normalización del mercado crediticio; dos, el abaratamiento del petróleo, casi un 50% en un solo año, siendo la española la economía de la Eurozona más dependiente de las importaciones de hidrocarburos; tres, la también pronunciada depreciación del euro (más de un 15% en apenas unos meses y por encima del 30% desde el inicio de la crisis), que aporta una valiosísima ayuda adicional a las exportaciones más allá de la Eurozona y a la atracción de turistas con libras esterlinas o dólares, por ejemplo. Son los tres factores que alimentan eso que se ha venido en llamar el “viento de cola” de las economías de la Eurozona, sus “propulsores externos”, a cuya continuidad fía el Gobierno el cumplimiento del Programa de Estabilidad más arriba aludido.

Desde luego que ese empuje nos está ayudando, y mucho; pero también beneficia a los otros países que comparten el euro, y prácticamente nadie en la Eurozona está aprovechándolo tanto como la economía española. Algo habrá que poner también, consecuentemente, en el haber de las reformas efectuadas durante la legislatura (saneamiento bancario, reforma laboral, plan de pago a proveedores, las recientes rebajas impositivas...). Y también, y no en último lugar, algún mérito cabe atribuir a las empresas españolas que han sabido capear el temporal, demostrando una sobresaliente capacidad de gestión: tómese como referencia que las ventas de bienes en el exterior durante la crisis no sólo no han perdido cuota en el comercio mundial, sino que también han ampliado su radio de acción en los mercados internacionales, con diversificación de productos y de países (más del 50% de las exportaciones españolas ya se colocan fuera de la Eurozona), aumentando notablemente en años muy difíciles el censo de las empresas exportadoras (en torno a 150.000 hoy); un desempeño ciertamente elogiabile. Motivos para la autoestima.

Cuarta: no faltan, en todo caso, razones para la autoexigencia. La recuperación es hoy por hoy firme, pero los supuestos (externos e internos) en

que se basa no están a resguardo de contingencias sobrevenidas. Y, sobre todo, las profundas heridas que ha causado la crisis, la más aguda en más de medio siglo, tardarán en cicatrizar, reclamando por ello esfuerzos continuados. Los costes sociales y económicos han sido y están siendo muy altos. Paro, desigualdad y endeudamiento es una tríada temible. Aún en el esperanzador cuadro pintado por el Gobierno para el cuatrienio 2015-2018, el desempleo se mantendrá en cotas que la sociedad española no debería tolerar: más de 3 millones de personas, muchas de ellas —quizá más de un millón y medio— en situación propiamente de inempleabilidad, bien por carecer los jóvenes de un mínimo de estudios y cualificación, bien por haber perdido el empleo los de edad avanzada y engrosar desde entonces el colectivo de parados de larga duración. Y el paro es la principal fuente de desigualdad, y por eso la desigualdad —desigualdad de rentas y de oportunidades— se ha ahondado en España y podría seguir ahondándose con el riesgo que ello implica en términos de cohesión social. Por su lado, el alto endeudamiento de nuestro sector público supondrá, hasta reducirlo a los niveles previos a la crisis, un elevado coste que recaerá sobre varias hornadas generacionales. Dejar definitivamente atrás la crisis llevará tiempo y exigirá esfuerzos, incluso con la Providencia al quite, por decirlo con expresión de Flores de Lemus.

* * *

Le toca el turno al tercer test, el que concierne a la integridad territorial de España. Seré muy breve; sólo dos notas ahora.

Primera: la deriva durante el último lustro del nacionalismo catalán hacia una posición nítidamente independentista se resiste a explicaciones simplistas. Tiene que ver, sin duda, con la defectuosa gestación, en todos los tramos del proceso, del Estatuto de Autonomía de 2006. Asimismo, con el apoyo activo —no poco paradójico— que la opción soberanista ha recibido por parte de una muy considerable parte de la clase intelectual más cualificada, cosmopolita e influyente —la *intelligentsia*— de catalanes nacidos en los dos decenios posteriores a la Guerra Civil. Y también, claro está, con la crisis económica e institucional padecida: la independencia como tabla de salvación particular ante el riesgo de naufragio del país entero. Como fuere, no es un fenómeno susceptible de diagnóstico sencillo; contiene más complejidad que cualquiera de las manifestaciones nacionalistas en Cataluña a lo largo de un recorrido temporal ya más que centenario.

De ahí las obligadas reservas a la hora de vaticinar el futuro inmediato en este frente. Si una de las causas del auge independentista ha sido la crisis, en todas sus dimensiones, lo esperable será un reflujó del tal marea al superarse aquella, tanto en lo económico y social como en lo institucional; los más recién-

tes sondeos de opinión parecen apuntar en esta dirección, al detectar un cierto declive en las preferencias declaradas a favor de la opción soberanista (“cambio de rasante en el independentismo” titulaba su comentario editorial *La Vanguardia* el 4 de este mismo mes de mayo). Por su parte, las cuotas de votantes que también ahí sean capaces de captar Ciudadanos y Podemos quizá resten peso asimismo a las formaciones independentistas. Y es igualmente cierto que con el paso de las semanas se van haciendo más patentes las actividades y los pronunciamientos de aquella parte de la sociedad civil catalana contraria a la separación. La pelota está en el aire, y probablemente al partido le quede mucho, cualquiera que sea el resultado final... al menos por un cierto tiempo (que eso es, con unos u otros matices, lo que nos lega la historia, ya sea la experiencia de la Mancomunidad en la Restauración, o la del Estatuto de Autonomía en la II República o la del propio régimen autonómico en nuestros días).

Segunda: el nuevo panorama político español que parece hoy a punto de cobrar entidad —todo lo apuntado en la primera parte de esta exposición— puede afectar de pleno a uno de los ejes en que se ha basado precisamente la estabilidad del sistema: la contribución de los partidos nacionalistas, tanto catalanes como vascos —y en menor medida algún otro— a la formación y el desempeño de los gobiernos de España, mediante el apoyo que prestaban, a modo de fiel de la balanza, a formaciones monocolors no mayoritarias a cambio de diversas compensaciones políticas o económicas para sus respectivos territorios. El cambio que anticipan las encuestas hará perder importancia a ese puntal que han ofrecido los partidos nacionalistas, con el riesgo —préstese atención— de que estos, los partidos nacionalistas, pierdan incentivos para involucrarse en los intereses generales del Estado. Como, por otra parte, la comparecencia electoral de Podemos y Ciudadanos reducirá la presencia de PP y PSOE en el País Vasco y en Cataluña, el riesgo de alejamiento, de desinterés por el conjunto de España, será aún mayor, ya que ambos componentes, el de la contribución a la gobernabilidad del todo y una apreciable implantación de los grandes partidos en dichas comunidades autónomas, han sido fundamentales para la integración territorial en términos políticos.

El tema es muy serio, y todavía más si en el paquete se mete el complejísimo escenario político que se está conformando en Navarra, abocado a presencias irrelevantes de los partidos de rango nacional a escala de toda España. Quedarían así afectadas tres piezas clave —País Vasco, Navarra y Cataluña— en el mapa español, cualquiera sea la dimensión que se considere; el “desanclaje” de cualquiera de ellas tendría efectos mayúsculos; el de las tres, sencillamente incalculables. Por eso la del 27 de septiembre es una prueba de enorme trascendencia.

* * *

He de terminar ya, pero no sin apuntar una convicción profunda, y creo que con alguna base empírica. La sociedad española no solo es una sociedad con capacidad de reacción frente a las dificultades, sino también, en el marco europeo, menos tentada de expresiones extremistas, ya sean antieuropeas, xenófobas o antiislamistas: nada tenemos aquí, en efecto, que sea el remedo del Frente Nacional francés, o del Partido de los Verdaderos Filandeses o del Movimiento Cinco Estrellas de Italia, o de la Alternativa para Alemania o del Partido de la Independencia del Reino Unido, el cual, por cierto, aún con solo un escaño en las elecciones del 7 de mayo, ha conseguido nada menos que cuatro millones de votos. En España hay indignación y cabreo —si se me permite el coloquialismo— pero no organizaciones como las mencionadas. Además, el dinamismo de la sociedad civil es más que notable como respuesta a la profundidad de la crisis, constituyendo foros, plataformas o círculos de opinión, y multiplicando iniciativas y propuestas. Las actuaciones solidarias alcanzan grandes proporciones, con el tejido familiar desempeñando en este sentido un papel decisivo y con instituciones privadas —Cáritas al frente— convertidas en proveedores de servicios públicos sociales. Y si se mira al otro extremo, un dato sobresale: la criminalidad ha disminuido en medio de una crisis muy severa. La propia salida a la superficie de tantos casos de corrupción, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites y el clima de impunidad en que se han movido (¡suman varios centenares los políticos y banqueros que hoy se las están viendo con los tribunales de Justicia!), pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional. La sociedad española se merece, por ello, un voto de confianza.

No todos probablemente compartirán este juicio, pero yo lo tengo por bien justificado. Creo, además, que el optimismo, en ciertas circunstancias, es una obligación moral de quienes nos movemos en aulas y foros académicos. Lo diré con las palabras textuales del actual director de la Escuela de Fráncfort: “Una de las tareas de los intelectuales es hacer lo que podamos para aumentar la confianza de la gente en su capacidad de cambio. Tenemos la obligación moral de no ser pesimistas. Va contra la democracia hacer creer a la gente que carece de capacidad para cambiar las cosas”.